



La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la comunicación por la asociación consultante de la relación de asociados y de sus cargos al Servicio de Estudios y Defensa de la Competencia de la Diputación General de Aragón, en el marco de un procedimiento sancionador por infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, amparándose dicha solicitud en lo previsto en el artículo 39.1 de esta Ley.

En el supuesto sometido a informe nos encontramos ante una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como *“Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”*.

Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo 11 de la misma Ley, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar, el previo consentimiento del interesado (artículo 11.1), otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

No obstante, el artículo 11.2 prevé una serie de excepciones que, a los efectos que interesan en el presente supuesto, quedan limitadas a la contenida en el apartado a) que prevé la posibilidad de cesión incontestada *“Cuando la cesión está autorizada en una Ley.”* Por tanto, será necesario que exista una norma con rango de Ley, estatal o autonómica que habilite la cesión no consentida de los datos.

En el presente caso debe recordarse que la Sentencia 208/1999 del Tribunal constitucional, declara inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, señalando que a las comunidades autónomas les corresponde, en virtud de la asunción de comercio interior, competencias en la materia limitadas a las actuaciones ejecutivas que se realicen en su territorio y que no afecten al mercado supracomunitario. Estas competencias ejecutivas, como recuerda la propia Sentencia, se entienden referidas a la potestad de dictar actos administrativos y reglamentarios internos de organización de los correspondientes servicios, así como facultades de inspección, control y sanción y ordenación de la actividad de los servicios. Por otra parte, la aludida Sentencia impone al estado la

obligación de establecer el marco para la ejecución de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sentencia 208/1999 se dicta la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, de cuyos preceptos interesa aquí mencionar la disposición adicional primera que establece que las referencias al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia que se contienen en los artículos que enumera de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se entenderán efectuadas a los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, cuando las potestades administrativas y los procedimientos en ellos regulados se ejerzan o tramiten en relación con conductas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1/2002 sean competencia de las Comunidades Autónomas.

A los efectos de la consulta formulada, resulta relevante que entre los artículos enumerados en la disposición adicional primera de la Ley 1/2002 se encuentre el artículo 32 de la Ley 16/1989 que establece un deber de colaboración con la Administración al disponer lo siguiente en su número primero *“Toda persona natural o jurídica queda sujeta al deber de colaboración con el Servicio de Defensa de la Competencia, y está obligada a proporcionar a requerimiento de éste, y en un plazo de diez días, toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley.”*

La Ley 16/1989 ha sido derogada por Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, cuyo artículo 39 impone igualmente un deber de colaboración con la Administración para la aplicación de la Ley, obligación de colaboración que, consecuentemente con los cambios institucionales que la nueva Ley introduce, se establece en favor de la Comisión Nacional de la Competencia, que sustituye al Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia que desaparecen. Dispone el artículo 39 que *“Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso se fije de forma motivada un plazo diferente.”*

La Ley 15/2007 hace expresa referencia a las competencias que en materia de Defensa de la Competencia pueden ejercer las Comunidades Autónomas señalando en su artículo 13 que *“Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de esta Ley ejercerán en su territorio las competencias ejecutivas correspondientes en los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma y en la Ley 1/2002, de 21 de*

*febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.*

Asimismo, la disposición adicional octava de la Ley 15/2007 prevé, al igual que lo hacía la Ley 1/2002 que *“Las referencias contenidas en esta Ley a la Comisión Nacional de la Competencia y a sus órganos de dirección relativas a funciones, potestades administrativas y procedimientos, se entenderán también realizadas a los órganos de instrucción y resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia cuando las mismas se refieran a las competencias correspondientes previstas en el artículo 13 de esta Ley.”*

En lo que se refiere a los órganos autonómicos con competencias en materia de Defensa de la Competencia en la Comunidad a la que se refiere la consulta, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón le atribuye en su artículo 77.17 dentro de las competencias ejecutivas la de *“defensa de la competencia en el ámbito autonómico, en los términos establecidos en la legislación estatal y europea”*

El Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón, crea el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, atribuyendo al primero en el artículo 3.a) competencia para *“resolver los procedimientos administrativos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1,6 y 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia, cuando dichas conductas puedan alterar la libre competencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin afectar a un ámbito superior o al mercado nacional.”* Mientras que al Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón le corresponde, según el artículo 11.a) *“Instruir y, en su caso, informar los procedimientos administrativos cuya resolución sea competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, según lo establecido en las letras a) y b) del artículo 3 del presente Decreto.”*

En consecuencia, la cesión por la asociación consultante de los datos personales requeridos por el Servicio de Defensa de la competencia de Aragón, órgano competente para instruir los procedimientos sancionadores en el ámbito de las competencias ejecutivas en esa materia que tiene atribuidas dicha Comunidad Autónoma, se encuentra amparada por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999 al existir una norma con rango de ley (la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia examinada) de la que deriva directamente un deber de colaboración con los órganos correspondientes de la Administración autonómica equivalente al que se impone en favor de la Comisión de Defensa de la Competencia en el ámbito estatal.



En todo caso, debe recordarse que la habilitación legal que resulta de la Ley 15/2007, deberá cumplir el principio consagrado por el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 según el cual “*Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos*”. Por consiguiente, los datos personales cedidos no podrán ser tratados para finalidades distintas de las de instrucción y resolución de los procedimientos administrativos atribuidas a los órganos de Defensa de la Competencia de Aragón.